

Prisiones Privadas y Contribuciones Financieras Electtorales: ¿Cómo la Influencia del Dinero en la Política afecta a las Leyes de Inmigración?

Pamela Cataldo y Jasmine Gomez

Free Speech For People
Reporte de Asunto 2016-03 (ES)

Diciembre 2016

Prisiones Privadas y Contribuciones Financieras Electtorales: ¿Cómo la Influencia del Dinero en la Política afecta a las Leyes de Inmigración?

Pamela Cataldo, Field Investigator & Paralegal
Dēmos

Jasmine Gomez, Democracy Honors Fellow
Free Speech For People

LA LEY DE INMIGRACIÓN SUFRE A CAUSA DEL DINERO EN LA POLÍTICA

El presidente electo, Donald Trump, anunció que en sus primeros 100 días a cargo, deportará entre [2 y 3 millones](#) de personas indocumentadas. Muchas de estas personas indocumentadas serán [detenidas en centros de detención de inmigrantes](#) mientras esperan procedimientos de deportación. Como resultado, las compañías de prisiones privadas – las cuales dirigen la mayoría de los centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos- vieron un incremento en el [valor de sus acciones](#). Estas subieron un 40 y un 16 por ciento la noche en que se anunció que Trump había ganado la presidencia. Esto nos hace preguntar, ¿sabían las compañías de prisiones privadas que el valor de sus acciones aumentaría si Trump fuese el ganador de la elección? ¿Puede ser que las compañías de prisiones privadas y que los sindicatos de guardias ayuden a elegir a políticos que los ayuden a proteger sus beneficios económicos? Si es así, ¿Cómo es que esto afecta a las políticas sociales tales como la conversación sobre la reforma migratoria?

LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES SEGUIR EL DINERO

Las compañías de prisiones privadas entendieron los beneficios que obtendrían bajo una presidencia de Trump mucho antes de las elecciones. En septiembre del 2016, las compañías de prisiones privadas sufrieron una aguda disminución en el valor de sus acciones. Para invertir en su futuro, las compañías de prisiones privadas contribuyeron más de \$ 150,000 [a la campaña de Trump](#). Esto incluyó un pago de \$ 100,000 que aparentemente [violó las leyes de financiamiento de campaña](#) . La contribución se hizo mientras las compañías de prisiones privadas estaban negociando con el Departamento de Justicia sobre el continuo uso de prisiones privadas a nivel federal.

Con la victoria de Trump y el fuerte aumento en el valor de las acciones que siguió, las compañías de prisiones privadas claramente hicieron una exitosa inversión económica. ¿Pero cómo esto afectó al país? ¿[Qué piensa la gente de detener y deportar a los inmigrantes](#)? Cuando se trata de la reforma migratoria, ¿han estado los funcionarios públicos escuchando a sus financiadores, o a los ciudadanos de este país? La historia de cómo la crisis de la detención de inmigrantes ha sido prolongada y ampliada por corporaciones y otros intereses monetarios es compleja e involucra a muchos actores: políticos, compañías de prisiones privadas, sindicatos de guardias de prisiones y, en última instancia, la Corte Suprema de los Estados Unidos. El punto más claro para comenzar a entender es el sistema de detención de inmigración.

La mayoría de los inmigrantes indocumentados que están detenidos -incluyendo a refugiados y solicitantes de asilo en espera de procesamiento- se encuentran en prisiones privadas con fines de lucro conocidas como "centros de detención de inmigrantes". Corrections Corporation of America, que recientemente cambió su nombre al Orwelliano "CoreCivic" y GEO Group, Inc. son dos de las compañías de prisiones privadas más grandes en los Estados Unidos. Juntas, dirigen el [90 por ciento](#) de los centros de detención de inmigrantes. Actualmente estas prisiones privadas detienen a [33.000](#) inmigrantes, refugiados y víctimas de trata de personas al día. Se espera que ese número aumente dramáticamente si Trump se mantiene fiel a su promesa de deportar a 2-3 millones de personas indocumentadas.

Como respuesta, los inmigrantes detenidos han estado arriesgando sus vidas para exigir el fin de las deportaciones y para mejorar las situaciones deplorables en estos centros de detención de inmigrantes. Se han llevado a cabo varias [huelgas de hambre](#) para protestar contra condiciones tales como niños obligados a usar uniformes de prisión, víctimas de tráfico humano obligadas a trabajar bajo condiciones cercanas a la esclavitud y agresión sexual desenfrenada que se comete con impunidad.

A mediados del 2000, CoreCivic (entonces operando bajo el nombre de Corrections Corporation of America) abrió su primer centro de detención de familias inmigrantes el cual alberga a mujeres y a niños. Después de sólo unos pocos años, este centro de detención fue cerrado debido a las condiciones inhumanas en las cuales operaba. Según una [carta de coalición](#) firmada por más de 100 organizaciones, "niños de tan sólo ocho meses llevaban uniforme de prisión. . . Y se les amenazaba con tácticas disciplinarias alarmantes, incluyendo amenazas de separación de sus padres si lloraban demasiado o si jugaban ruidosamente". Los niños tampoco recibían tratamientos médicos o educación apropiada. En otra instalación de CoreCivic, el centro de detención de Eloy, una inmigrante transgénero llamada Marichuy Leal Gamino, [fue asaltada sexualmente](#) por su compañera de celda en el 2014. Cuando reportó su abuso, el personal le dijo que firmara una declaración que decía que ella había consentido. Otras mujeres y personas queer han denunciado en repetidas ocasiones [asalto sexual](#) cometido por guardias en estos centros de detención.

En los centros de detención muchos inmigrantes también deben trabajar sólo para poder hablar con sus familias. Según Cristina Parker, Directora de Programas de Inmigración de la organización sin fines de lucro Grassroots Leadership, los inmigrantes detenidos en estos centros solo reciben \$ 1 - \$ 2 por un día de trabajo. El dinero que ganan debe ser gastado en el centro de detención, donde las mercancías, incluyendo las tarjetas de teléfono utilizadas para llamar a la familia, son significativamente más caras que los precios fuera de estos centros.

Incluso cuando las personas indocumentadas no están detenidas en estos centros, muchas se ven [obligadas a usar monitores de tobillo](#) como los del GEO Group. Estos monitores rastrean a las personas indocumentadas a través de GPS y permiten que el gobierno participe en vigilancia masiva de personas indocumentadas a través del programa federal "Alternativas a la Detención". A medida que los centros de detención se llenan, es probable que el gobierno dependa más de estos programas de "Alternativas a la Detención".

Este sistema es [caro](#), dañino y ha generado resistencia. Más allá de los numerosos inmigrantes detenidos que dirigen múltiples [huelgas de hambre](#), sus familias, los activistas y la mayoría del público están pidiendo cambios. Mientras que algunos aspectos de la política de inmigración son polémicos, una década de [encuestas](#) muestra que un consistente 65 por ciento de los adultos estadounidenses favorecen un camino hacia la ciudadanía para las personas indocumentadas. Si los inmigrantes y el público en general están ansiosos por ver cambios en nuestro sistema de inmigración roto, ¿por qué el Congreso no nos ha escuchado?

Una razón por la que el Congreso no ha escuchado es porque los deseos del público están en conflicto con los intereses de los ricos, los cuales son la minoría. Intereses muy bien financiados no dudan en usar su dinero en la política para proteger negocios con grandes ganancias. El estado actual del dinero en la política permite que aquellos que contribuyen más dinero tengan el mayor acceso a los políticos. Esto le da a los ricos una voz con más influencia en nuestro sistema político.

El poder de la minoría rica se destaca en un ejemplo reciente en California. La Asamblea y el Senado votaron [abrumadoramente a favor](#) del acto "[Dignidad no Detención](#)", una medida que prohibiría a ciudades, condados y autoridades locales de contratar con las prisiones privadas en los procedimientos civiles de inmigración. Este proyecto de ley fue presentado como una respuesta directa a [reportes preocupantes sobre las condiciones](#) en los centros de detención privados en California, que incluyen [negligencia médica y acusaciones de abuso sexual](#). Aun así, desde el 2010, el gobernador de California, Jerry Brown, ha estado [recibiendo donaciones de las prisiones privadas](#) y el [sindicato de guardias](#). Brown [vetó](#) el acto "Dignidad no Detención" protegiendo las ganancias obtenidas por estos grupos de interés.

El negocio de detener inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, entre otros, es una industria de [\\$2 mil millones dólares](#) en la cual las prisiones privadas se benefician generosamente. Esto se trata de un simple caso de oferta y demanda. Las empresas de prisiones privadas tienen un gran interés no sólo en mantener los contratos lucrativos con el gobierno, sino también en asegurar de que

haya un suministro constante de personas indocumentadas que se puedan detener. Por ejemplo, en el [Informe Anual 2015](#) CoreCivic advirtió a sus inversionistas que "la demanda por nuestras instalaciones y servicios puede verse afectada negativamente por la relajación de los esfuerzos de imposición ... cualquier cambio con respecto a ... inmigración ilegal que podría afectar el número de personas detenidas, condenadas y sentenciadas, lo que reduce potencialmente la demanda de las instituciones correccionales para alojarlos " .

Las compañías de prisiones privadas no son los únicos grupos de interés que contribuyen grandes donaciones de dinero a los políticos. En California, la Asociación Correccional de Oficiales de Paz de California (California Correctional Peace Officers Association) es un sindicato de guardias de prisión que representa a más de 30,000 oficiales correccionales de prisiones en el estado. Los sindicatos sólo cabildean en nombre de sus propios miembros, pero debido a que los guardias necesitan prisiones para tener puestos de trabajo, el sindicato también cabildea para impulsar la política pública hacia el [encarcelamiento](#).

Esto les da a las compañías de prisiones privadas y a los sindicatos de guardias un poderoso incentivo para usar su dinero en la política tales como: las contribuciones para campañas, gastos externos y cabildeo. Estas tácticas se utilizan para bloquear políticas que aumentarían el costo de hacer negocios, o que reducirían la demanda de detención de inmigrantes al reducir la privatización, o que arreglarían nuestro sistema inmigración.

Entre el 2000 y el 2012, GEO y CoreCivic (junto con otra pequeña empresa) han gastado más de [\\$32 millones](#) de dólares en contribuciones de campaña y cabildeo en el nivel federal solamente. En el 2014, CoreCivic y GEO gastaron más de \$ 3 millones en cabildeo al Congreso y más de \$500,000 en contribuciones de campañas federales. En el 2016, la campaña de Donald [Trump](#) recibió más de \$150,000 de las compañías de prisiones privadas, incluyendo \$100,000 que aparentemente violó las leyes de financiamiento de campañas. Estos números sólo reflejan las contribuciones reveladas, no tenemos manera de saber cuanto más estas compañías de prisiones privadas han gasta en contribuciones secretas conocidas como "[dinero secreto](#)". En California, GEO donó más de [\\$25,000](#) al gobernador Brown en el 2010 y más de [\\$50,000](#) en el 2014, mientras que CoreCivic donó más de [\\$60,000](#) a la campaña de Brown en el 2012. La campaña de reelección del Gobernador Brown también recibió más de [\\$2 millones del sindicato de guardias](#).

Aunque CoreCivic afirma que no hace cabildeo por leyes pro-encarcelamiento, podemos seguir el dinero y ver el impacto que las contribuciones tienen en las decisiones legislativas. En el 2010, se emitió una [orden judicial federal](#) para reducir el hacinamiento en las cárceles de California. Entre el 2010 y el 2014, el Gobernador Brown recibió dinero de las compañías de prisiones privadas y del sindicato de guardias. En el 2013, como respuesta a la superpoblación en las prisiones, el Gobernador Brown [abrió dos nuevos centros privados de detención](#) con GEO y CoreCivic. El contrato con GEO vale \$30 millones al año, pagados con el dinero de los contribuyentes estatales, y detiene a 1.400 personas en sus prisiones privadas; CoreCivic recibe \$28.5 millones al año del estado y detiene a 2.300 personas. El Gobernador Brown también dijo que las compañías de prisión privada [emplearían a guardias del sindicato](#). Estos fueron los tipos de contratos que fueron protegidos cuando el Gobernador Brown vetó el acto "Dignidad y no la Detención" bajo el razonamiento de que California debería esperar hasta que el Departamento de Seguridad Nacional decida si las prisiones privadas deben ser usadas como centros de detención de inmigrantes en el nivel federal.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional [anunció](#) que tomaría su propia decisión sobre el continuado uso de prisiones privadas para la detención de inmigrantes a finales de noviembre de este año, sus acciones ya han hablado más alto que sus palabras. El 17 de octubre, la oficina de Detención y Deportación (ICE) que opera dentro del Departamento de Seguridad Nacional omitió el proceso de licitación para otorgar a CoreCivic un contrato revisado y extendido cinco años para dirigir [un centro de detención de familias inmigrantes](#). ICE también ha estado incrementando el número de centros de detención que existen. A principios de agosto, la Oficina de Prisiones puso fin a un contrato con CoreCivic debido a una investigación que reveló graves patrones de negligencia médica dentro de la instalación. A pesar de esto, ICE firmó recientemente un acuerdo con CoreCivic para [reabrir esa misma instalación como centro de detención de inmigrantes](#). Esta no es la primera vez que el gobierno federal ha contratado a compañías de prisiones privadas. En el 2013 y el 2014, GEO y CoreCivic recibieron contratos valorados en [\\$1.561 billones de dólares de los contribuyentes](#). Además, CoreCivic gastó casi [\\$10 millones](#) de dólares en actividades de cabildeo directo al Subcomité de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional en el Congreso, el cual determina la cuota de detención de inmigrantes. Estas cuotas han aumentado en los últimos años; se le piden a los funcionarios de ICE que detengan a [34,000 personas indocumentadas diariamente](#) en los centros de detención de inmigrantes.

La manera en la que California y el gobierno federal están obligados a los intereses de la minoría rica (en este caso, las poderosas empresas y los sindicatos) es parte de una tendencia más amplia. Los que aportan la mayor cantidad de dinero a las campañas tienen más acceso a los políticos. Para que Estados Unidos pueda tener una conversación honesta y abierta sobre la reforma migratoria, hay que primero asegurarse de que todos tengan igualdad de acceso y de participación en el proceso político.

Estos ejemplos destacan uno de los más grandes obstáculos en la democracia estadounidense: el dinero en la política. Las decisiones de la Corte Suprema en [Citizens United v. FEC](#) y otros casos parecidos han establecido el poder del dinero en nuestro sistema político. En 1976, la Corte Suprema [dictaminó](#) que el dinero debe tener protecciones constitucionales de "libre expresión", lo que significa que los ricos (y desde *Citizens United*, corporaciones y sindicatos) pueden gastar cantidades ilimitadas de dinero en la política. Para participar en nuestro proceso político actual, es necesario tener suficiente dinero para competir con los intereses de los ricos. Esto ha creado un problema: cuando el dinero equivale a voz en la política, los que no tienen dinero tienen menos voz. [Estudios demuestran](#) que los votantes de ingresos medios y bajos prácticamente no tienen efecto en las políticas que pasa el Congreso. El Congreso escucha a aquellos que tienen más dinero para gastar en las elecciones. Esto nos ha dejado con una nación que ahora está dirigida por, y en gran parte para, la minoría rica.

Muchos estadounidenses ya saben que las prisiones privadas no ofrecen soluciones para las personas detenidas y encarceladas. Las corporaciones que se benefician en encarcelar a la gente no deberían tener más influencia que la gente de California y en todo los Estados Unidos. *Citizens United* y los otros casos relacionados de la Corte Suprema nos están impidiendo tener una verdadera conversación democrática. Pero podemos cambiar esta realidad. En este año, California y Washington [se unieron a otros 17 estados](#) para pedir al Congreso que apruebe una enmienda constitucional para anular *Citizens United* y las otras decisiones judiciales parecidas para permitir límites razonables en el dinero en la política. En cada elección, la lista de ciudades y pueblos que quieren democracia se alarga y alarga, sin importar si estas comunidades votan rojo o azul. Hoy existen organizaciones que nos están dando [herramientas](#) para [organizarnos](#). La anulación de *Citizens United* no arreglará nuestra política de inmigración, o el sistema de detención. Para luchar en contra del poder político de los intereses corporativos, necesitamos que las voces del pueblo se levanten por encima de las billeteras de los ricos.